

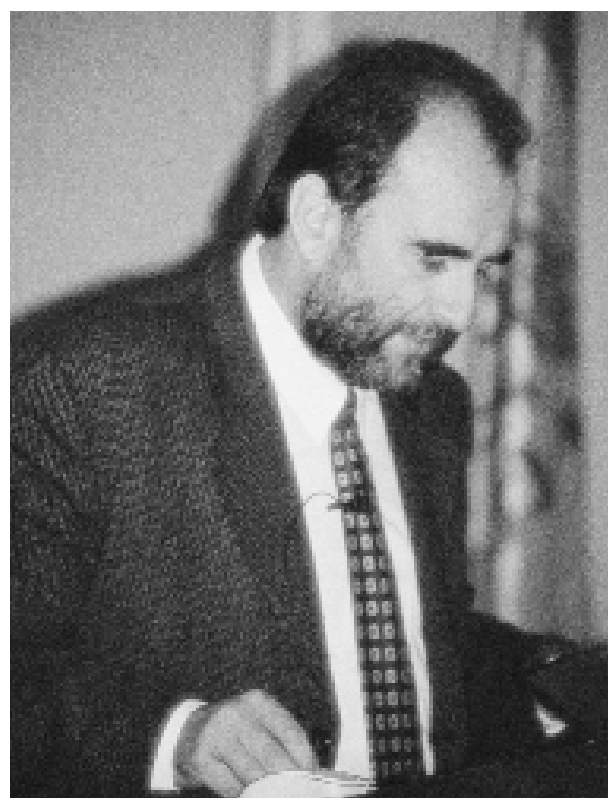
2. *SESIÓN INAUGURAL*



SESIÓN INAUGURAL

D. FERNANDO GÓMEZ AGUILERA

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE



Quiero expresar en nombre de la Fundación César Manrique mi agradecimiento al Gobierno de Canarias, en particular a su Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente aquí presente, por el honor que hacen a nuestra Fundación y a la memoria de César Manrique, con la invitación que nos han cursado para estar hoy presentes en esta sesión inaugural de la décima Jornada Temática de la Red de Autoridades Ambientales.

Aceptamos con sentido de la responsabilidad y con gratitud su generosidad, concretada en un ofrecimiento abierto a tomar la palabra para expresar cuantas consideraciones creyéramos oportunas exponer en este cualificado foro, que abordará las relaciones que se establecen entre Turismo y Medio ambiente.

Es consciente la Consejería anfitriona de este foro de que la voz de la Fundación César Manrique suele manifestarse con tanta libertad y voluntad crítica constructiva como con respeto y conciencia del valor cívico de los análisis de la realidad, que más allá de los aciertos y de las desviaciones, se formulan con el propósito de contribuir desde la corresponsabilidad a la construcción del bienestar colectivo y la convivencia

solidaria. Por ello, y porque consideramos que en Canarias compatibilizar la actividad turística con los equilibrios ambientales, pasa inexcusablemente por plantear la revisión del modelo económico turístico actual, les proponemos compartir los análisis, valoraciones y propuestas que a continuación abordaré.

Hablaré de Lanzarote fundamentalmente, como la Isla que encarna desde una posición aún de privilegio, si bien con fecha de caducidad, las oportunidades, los riesgos y desafíos que amenazan el presente turístico, socioeconómico y medioambiental de Canarias. Y plantearé también consideraciones sobre la situación general del Archipiélago.

Quiero comenzar con una metáfora extraída de un artículo con el lema "Turismo que es la guerra" de Federico Aguilera, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de la Laguna. Dice así: "La lógica con la que se mueve la economía del turismo en Lanzarote, igual que en el resto de Canarias, recuerda a la lógica que aplicaban Groucho Marx y Buster Keaton en el lejano Oeste, para mantener en funcionamiento su locomotora en aquella delirante carrera. Así como Groucho decidió ir destrozando los vagones del tren

para utilizarlos como combustible en la caldera de la locomotora, aquí se aplica desde hace tiempo la misma lógica con cada Isla. La locomotora del crecimiento turístico y de la masificación va destrozando de manera imparable el tren formado por islas - vagones, quemándolo, día a día, en esa caldera voraz de la lógica económica y del pseudo progreso hacia ninguna parte.

La diferencia consiste en que Groucho Marx tenía un objetivo muy claro, que era el de alcanzar al estafador que llevaba la escritura de la mina. Mientras que en Lanzarote, reserva o mina de la biosfera, la locomotora se alimenta de esa supuesta reserva, mientras corre en beneficio de unos pocos, ignorando todos los costes sociales ambientales.

Es más, sabemos que estamos deteriorando y agotando la mina de manera totalmente irreversible, aunque este agotamiento se disfraza con la exhibición de unos números, llamados Indicadores de Crecimiento, cuyo objetivo consiste en convencer a la gente de que ignore la realidad que ve y de que tenga fe en esos indicadores, en el sentido de que crea que ve una realidad distinta.

El problema es que esos indicadores son considerados científicos, por el hecho de sugerir que más equivale a mejor, y porque algunos de ellos son expresados en términos monetarios. Pero como ya se ha indicado, tratar de conducir la economía con los indicadores actuales, es como si estuviéramos conduciendo con el parabrisas empañado y confiando en un pasajero borracho para que nos dé indicaciones sobre la carretera."

Ciertamente, el calentamiento de la economía de Canarias, se produce de forma acelerada, favorecido por la magnitud de los recursos financieros en juego. A los ingresos por el negocio turístico hay que añadir la ingente cantidad de Fondos europeos que llegan a las islas, además de las aportaciones del Estado y el estímulo de la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, acumulada por el sector empresarial, aprovechando un incentivo fiscal previsto en el Régimen Económico y Fiscal del Archipiélago, con el objeto de fomentar la inversión a través de exenciones tributarias. Una reserva que acumuló 226.000 millones de pesetas, en 1998; un billón de pesetas en la actualidad, con unas previsiones de creación de una bolsa de capital de dos billones de pesetas en diez años.

Pero también la fiebre del blanqueo del dinero, provocada por la implantación efectiva de la moneda comunitaria, el euro, en el 2002, ha contribuido sustancialmente a elevar los grados del horno económico de las islas, que tuvieron en 1999 un año inmejorable para los intereses y los beneficios del sector privado.

A pesar de ello, los canarios siguen estando entre los ciudadanos españoles con menor renta per cápita. Canarias ocupa el duodécimo lugar, por debajo de la media, y muy lejos de Baleares, que es la Comunidad que registra mayor índice.

La Administración autónoma, fascinada por el mito del crecimiento continuo, por la metáfora de la locomotora –en 1998 la tasa positiva del PIB canario fue del 4,58 por ciento, la tercera de España– alimenta la maquinaria, al tiempo que aprovecha la energía liberada para insistir en potenciar la industria turística, que supone el 42 por ciento de la oferta global española, unos 12 millones, como ha sido dicho aquí, de turistas al año en Canarias; 729.000 plazas alojativas oficiales en 1998. Y aporta el 80 por ciento del PIB de la economía del Archipiélago, con una cifra anual de negocio en torno a 1,6 billones de pesetas en 1999.

No obstante, sorprende que mientras crece la reserva de inversiones empresarial la riqueza generada no se reparte más equitativamente. De modo que la tasa de paro continúa su progresión ascendente, un 13,29 por ciento en julio del 2000; el porcentaje más alto del país.

Pero a nadie preocupado parece interesarle profundizar en las contradicciones del sistema, o más exacto sería decir que poco a poco comenzamos a avanzar en esas contradicciones, suscitándose razonables dudas, no sólo sobre la capacidad de Canarias para dirigir el gran volumen inversor en circulación, sino también sobre los costes ambientales, sociales y territoriales, que habrá que pagar, ahondando aún más en la grieta de la insostenibilidad.

Mientras tanto, la legitimación monetaria del actual modelo económico, cuyo fracaso ecológico es conocido por todos, desatiende tanto los escenarios de riesgo, dibujados sobre el horizonte futuro, como las preguntas básicas que desde hace tiempo suscita una carrera tan autista, o las inquietudes planteadas desde ámbitos independientes de la sociedad, e incluso desde estamentos de la propia Administración.

No deja de ser preocupante en este sentido que en el Libro Blanco del Medio Ambiente, confeccionado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias hace unos años, después de recordar que: "la falta de sostenibilidad del modelo de desarrollo económico es cada vez más visible", se haya dejado constancia de algo que a estas alturas nadie duda: "El consumo de recursos naturales y el impacto ambiental, generado por las actividades turísticas, alcanza cotas alarmantes que pueden agravarse significativamente. Asistimos a la más radical transformación del territorio que haya conocido Canarias".

Sin embargo, no se ceja en la estimulación de la demanda turística, un comportamiento que sigue provocando el crecimiento continuo del parque alojativo, pero también de la población residente, que aumenta aceleradamente, sobre todo debido a la recepción de flujos migratorios, y a la intensificación de la presión sobre los recursos naturales, más allá de los márgenes de tolerancia, en torno a cuyos límites pocos quieren debatir.

A pesar de llamadas de atención tan explícitas, el sistema persiste en anudar exclusivamente el sentido del progreso a la razón económica, excluyendo consideraciones decisivas a la hora de plantear el bienestar, presente y futuro, de las sociedades y de los ciudadanos. Como por ejemplo, la conciencia de vivir en un planeta con límites y la no renovabilidad de ciertos recursos naturales.

Quiero hablarles de la situación de Lanzarote: Aunque afortunadamente no todo está perdido, en términos territoriales, y contamos con un activo considerable, tampoco se dispone de mucho más margen de elección y de tiempo. De todas las hostilidades, la de mayor envergadura en Lanzarote y en Canarias es la que plantea el crecimiento y la masificación turística.

En su acción se reconoce el origen de la hipertensión, que padece nuestra isla, fuente a su vez, de un torrente de desajustes orgánicos. Desde 1997, la presión urbanística se ha intensificado notablemente, y hoy asistimos a un desaforado proceso de urbanización. El consumo de cemento proporciona un indicador significativo: en 1995 se emplearon 99.000 toneladas, en 1997 crecieron hasta 124.000, y en 1998 llegaron a 151.000. Cifra ampliamente superada en el 99 y en el 2000.

La economía insular está volcada en el monocultivo turístico, que ha estrangulado la diversidad del tejido productivo, haciendo retroceder hacia lo meramente testimonial las actividades tradicionales de la pesca y la agricultura.

En 1998, el sector servicios aportó el 87,8 por ciento de la economía insular, y la construcción supuso el 7.6 por ciento; mientras que la superficie cultivada, en constante retroceso, fue de 3.300 hectáreas, frente a las 4.800 de 1991.

La brusca e intensa activación del sector inmobiliario deriva en agudas y aceleradas transformaciones territoriales y sociales, que el frágil metabolismo insular se muestra incapaz de incorporar.

El resultado se resuelve en forma de un creciente malestar social. La convivencia con el nuevo mapa socioeconómico, surgido de la hipertrofia, se precipita traumáticamente en una comunidad que, desde los años setenta, se ha visto forzada a cambiar bruscamente su modelo socioeconómico, pasando de una base productiva agrícola - pesquera a una economía basada en el turismo, es decir, una radical terciarización.

El vértigo demográfico que zarandea a la Isla en los últimos años, habla por sí solo. Permítanme que les dé unas cifras: de los 58.600 habitantes, de derecho, que vivían en Lanzarote en 1987, con un promedio diario de 17.182 turistas, se pasó a 84.800 en 1998, a los que hay que añadir una media diaria de 49.600 turistas. Con lo que la población de hecho se situaba en 134.000 personas. Cerca de 92.000 habitantes en enero de 1999, aproximadamente un 65 por ciento nativos; y a 100.000 en febrero del 2000.

La inmigración laboral representa el aporte más importante en esa tendencia creciente, que acentúa la presión demográfica y proyecta ritmos de incremento poblacional vertiginosos sobre un territorio reducido, 840 kilómetros cuadrados.

Entre 1998 y 1999, la población insular aumentó en 7.000 personas. Mientras que en los once primeros meses de 1999 se inscribieron en los censos municipales 8.500 nuevos residentes. Con una densidad de población, de derecho, de 100 habitantes por kilómetro cuadrado en 1998 y 118 habitantes, aproximadamente, en la actualidad.

En su conjunto, deben ustedes saber que la Comunidad Autónoma de Canarias, con un millón seiscientos mil habitantes en 1998 y una media de 219 habitantes por kilómetro cuadrado, muestra uno de los aumentos demográficos más altos del Estado. Entre 1981 y 1996, la población del Archipiélago creció en un 17,4 por ciento y el número de inmigrantes subió, en términos relativos, en un 91 por ciento.

Por su parte, Gran Canaria y Tenerife se encuentran entre las islas con mayor densidad de población del mundo: 459 habitantes por kilómetro cuadrado en Gran Canaria y 333 en 1998 en Tenerife. Mirando hacia el futuro, en un estudio presentado a comienzos de este año, el Instituto Canario de Estadística preveía un incremento demográfico de Canarias del 12 por ciento en 15 años, entre 1996 y 2011, es decir hasta alcanzar aproximadamente un millón ochocientos mil personas. Madrid crece, para que tengan una referencia comparativa, por ejemplo, a razón del 4 por ciento.

En Lanzarote la explosión demográfica, con tasas de crecimiento anual difícilmente asimilables ha saturado los servicios sanitarios, hoy en situación crítica, y los centros educativos, dando lugar a incomodidades y descontentos, que ocasionan conflictos tanto de integración como de exclusión, por parte de sectores de población residente. Manifestándose en forma de actitudes de rechazo al otro, y de refuerzo y de exaltación de la singularidad y los valores locales.

Pero es la misma maquinaria que calienta la economía y hace crecer el edificio turístico la que imanta el desbarajuste inmigratorio, por encima de los ritmos naturales deseables. En aquel fuego está el origen de estos humos.

El incremento acelerado y sostenido de la actividad económica y de la población, suscita desajustes en todos los ámbitos de la realidad, desestructurando el frágil sistema insular y poniéndolo en situación de riesgo.

La dependencia energética de la isla es absoluta, debiendo importar los combustibles fósiles que abastecen la maquinaria de producción de energías y de agua desalinizada, sin la que no podría subsistir la industria turística.

El equilibrio es precario. Lanzarote, en medio del Océano, con un tejido productivo polarizado en torno al sector servicios, basado en el consumo de energía, recursos naturales y en la producción de residuos, está

a merced de los flujos de reserva de los combustibles tradicionales. Y las proyecciones y el crecimiento se plantean, en algunos casos, como si los recursos energéticos fueran propios e infinitos.

El crecimiento de la producción y de los consumos es imparable. El suministro de gasolina fue de 40.000 toneladas en 1998, el 62 por ciento más que diez años antes. Tan desmedido porcentaje deja de sorprender cuando nos adentramos en las estadísticas del sobredimensionado parque automovilístico de Lanzarote: 76.000 vehículos y 840 kilómetros cuadrados en 1988. Una cifra que sienta la proporción de 901 vehículos por cada mil habitantes y que continúa aumentando. De modo que, en 1999 se contabilizaron ya 83.000 automóviles. Con una red de transporte público en estado precario, y un parque móvil de coches de alquiler, que suma la cifra oficial de más de 22.000 automóviles. Probablemente unos 15.000 rodando.

Las fuerzas del mercado operan con toda intensidad, empeñadas ciegamente en mantener en funcionamiento una gran maquinaria productiva que se proyecta sobre un escenario sin límites, como si la Isla no tuviera fondo social, ni territorial, ni medioambiental.

La isla está también en el ojo del huracán de inversiones, un huracán indiscriminado, que puede provocar una intensa y acelerada transformación del territorio, adecuándolo para asimilar mayores flujos turísticos, de excursión y de estancia. A la vez que ejercerá una notable presión sobre el litoral.

Permitanme que les ofrezca alguna información. La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, afirma estar invirtiendo en la Isla durante el año 2000, en torno a 9.000 millones de pesetas destinados a costas, infraestructura hidráulica y carreteras. Y anuncia que en los próximos años el ritmo anual inversor será de 3.000 millones de pesetas. La bulimia, se expande por la totalidad del espacio insular, en forma de ampliación de carreteras, una red de campos de golf, hasta siete se han puesto sobre la mesa; una red de puertos deportivos, que colonizará la franja litoral, estimulando el desarrollo inmobiliario del entorno y perturbando los ecosistemas marinos, en el peor de los casos; desalinizadoras; parques temáticos; quizás dos nuevos centros turísticos; más puertos comerciales, como la ampliación planteada en el sur de la isla, con 7.500 metros cuadrados de zona comercial, 6.000 millones de pesetas de inversión, etc. Una

operación con la que se pretende facilitar, y término con el que ustedes no estarán familiarizados, pero que a nosotros nos preocupa mucho, la habilitación de lo que se está denominando "autopistas marítimas", que en este caso, permita un enlace fácil entre Lanzarote y Fuerteventura, para que, entre otras cosas, recibir turismo de crucero y turismo residual de excursión procedente de la Isla Majorera, que tiene unas previsiones de 400.000 ó 500.000 camas turísticas. Esto provocará que Lanzarote se convierta a medio plazo en un parque temático de la isla vecina, si no ponemos remedio a ello.

Ciertamente, en los próximos años, las láminas de agua del litoral canario padecerán intensas acometidas inmobiliarias. Tal conglomerado de infraestructuras de carga, que contrasta vivamente con la práctica ausencia, o la minimizada presencia de políticas y de inversión innecesarias, infraestructuras sociales (equipamientos culturales y de ocio, educación, zonas verdes, camas hospitalarias, centros de atención e integración social), amenaza con configurar la isla como un barroco escenario, un gran parque de atracciones variadas, en el que se acumulen las distorsiones de los continentes, mientras, aceptada la imposibilidad de adaptar las ventajas de los territorios continuos, se disuelvan las singularidades insulares.

Sensibilizado con esta situación, desde mayo de 1998 el Cabildo Insular procuraba tramitar la revisión del Plan Insular del territorio, aprobado definitivamente en mayo del 2000. La revisión, conocida popularmente como "moratoria", quería moderar el crecimiento de camas turísticas en un periodo de diez años, que sirviera para meditar y tomar decisiones sobre el futuro.

Desde la Administración se reconocía la presión incontrolada a la que estaba siendo sometida la isla, incapaz de deglutirla. Se suspendió la concesión de licencias de construcción turística durante dos años y se reprogramó el PIOP, aprobando la autorización para poner en circulación 10.700 nuevas plazas turísticas y 17.900 residenciales en zonas turísticas, hasta el 2010. Construcciones que se sumarían al parque alojativo ya existente: 57.000 camas, según cifras oficiales y 73.000, según otras estimaciones.

Lo significativo, en todo caso, es la vergonzosa ausencia de datos reales y sistemáticos sobre la ocupación del suelo y las licencias municipales aprobadas, recayendo, sobre todo en los ayuntamientos turísticos de la isla, la responsabilidad de

ese secuestro de información que los ciudadanos reclaman.

Sin embargo, desde sectores ecologistas, grupos de opinión y la propia Fundación César Manrique, se respondió pronto a la medida, impulsada por el Cabildo, por considerarla insuficiente. Pero aun así, hay que reconocer que sigue siendo un punto de referencia, político, técnico y social, para el resto de Canarias.

Lo cierto es que, en la actualidad, la construcción sufre una aceleración desproporcionada, como consecuencia de la actividad del sector, en plazas alojativas turísticas nuevas y viviendas residenciales.

La realidad se convierte en la mayor de las evidencias y juez inapelable. Y es también un hecho cierto que difícilmente la isla podrá asimilar más camas de las construidas en la actualidad, sea este el número que sea, que, desde luego, supera con creces las cifras oficiales.

El futuro es sombrío. Si tenemos en cuenta que en 1998 Lanzarote recibió 1.738.000 turistas, con una ocupación media del 88,5 por ciento. Y el aeropuerto registró 4.577.000 pasajeros de movimiento en 1998. Diez años antes fueron la mitad: 2.000.000, con un tráfico de 43.000 aeronaves.

En realidad, los márgenes de tolerancia parecen agotarse, y así lo perciben amplios sectores de ciudadanos, y agentes sociales, que cuestionan abiertamente el actual modelo y su inercia.

La visibilidad social de los desajustes y alteraciones, a las que se ve sometida la isla y la vida diaria de sus habitantes, contribuye a la inquietud y a la conformación de una masa crítica, que apuesta por evitar la instrumentalización del territorio, invertir las tendencias regresivas y planificar las actividades productivas, en el marco de la cultura de los límites y de políticas alternativas que se sobrepongan a los intereses inmobiliarios.

Avanzar en el debate y en la concreción de alternativas factibles al actual modelo de desarrollo turístico en Canarias resulta, a juicio de la Fundación César Manrique, una tarea prioritaria e inaplazable del Gobierno regional, de los cabildos, de los ayuntamientos, de los agentes económicos y de la sociedad civil. La ciudadanía lo reclama en un contexto

de riesgo y de malestar, que debe ser interpretado y encauzado sin dilaciones.

La oportunidad política para revisar el modelo económico es explícita, si leemos la inquietud y la sensibilidad de la población. Una energía que merece ser canalizada, y que en términos de gestión política constituye un activo de indudable valor. La realidad habla con suficiente expresividad como para que quienes están obligados a escucharla entiendan la inviabilidad de un paradigma económico - turístico, que sin matices ni limitaciones ha puesto las islas al servicio del turismo, y a sus ciudadanos al servicio de los turistas.

La operación de inversión conceptual que se impone es bien sencilla en su formulación como principio general. En nuestro caso, el turismo ha de gestionarse y regularse como una actividad fundamental al servicio de las islas y de sus habitantes, y no al contrario. Esto es, entender las islas como espacios sociales, y no como espacios mercantiles, en cuyo ámbito deben prevalecer los intereses colectivos y las calidades ambientales.

En nuestra opinión, las islas no pueden seguir gestionándose como combustible destinado a sostener la actividad mecánica de la maquinaria económica. Si ese es el fundamento del modelo actual, y a nuestro juicio hoy no cabe duda de que es así, estamos emplazados a cuestionarlo a fondo. Se trata de un modelo, que por la sobrecarga que produce, por los costes sociales y ambientales, por su extrema dependencia y vulnerabilidad frente a cualquier crisis externa, no puede sostenerse en el tiempo.

Como ha indicado José Manuel Naredo, la mejora en la calidad de vida y la mejora del ambiente, no pueden ser objetivos separados ni enfrentados, al modo en que ocurre en la economía clásica y, por supuesto, en la actividad turística a gran escala. Persistir en esa fractura es condenar el territorio y las actividades de transformación, ejercidas sobre él, a la regresión y, en el peor de los casos también, a la roturación.

A las 800.000 camas turísticas aproximadamente, existentes en Canarias, no pueden sumarse, sin el temor al colapso y la degeneración de la oferta y de la calidad de vida de los ciudadanos, una expectativa inmedias de 100.000 nuevas plazas, y más de 850.000, a medio y a largo plazo, tal y como se deduce de las cifras contempladas en los diferentes planes.

También, en el redimensionamiento del modelo y la salvaguarda de los equilibrios ambientales y sociales, están implicados otros factores estratégicos claves del debate. Les nombro algunos:

El crecimiento de las infraestructuras públicas de carga: carreteras, aeropuertos, y puertos fundamentalmente.

La construcción de una oferta complementaria de ocio, con fuerte incidencia sobre el territorio, vinculada últimamente a un discutible concepto de turismo de calidad, que continúa acentuando el consumo de recursos y espacios físicos, y ofreciendo más de lo mismo.

El planeamiento urbanístico del suelo no turístico en los diferentes municipios, a través de directrices reguladoras. Baste decir que en Lanzarote desde 1975 hasta hoy, y confronto los datos de crecimiento, sólo se ha desarrollado un plan general de ordenación urbana y se han redactado normas subsidiarias en dos ayuntamientos.

Las líneas de incentivos fiscales empresariales y reservas de inversión pueden convertirse en un potente instrumento de presión sobre el territorio, y de calentamiento de la inversión, en obra pública sobredimensionada, en actividad turística y en inversión inmobiliaria.

En una sociedad y en una época de complejidades, como la que nos ha tocado vivir, es necesario avanzar en la cultura de los matices y de las nuevas visiones, que permitan construir otra realidad. En este sentido, quiero hacer breve referencia a dos cuestiones que acabo de nombrar: el turismo de calidad y los incentivos tributarios.

Desde determinados sectores de la Administración y del tejido empresarial turístico canario, se viene insistiendo en una etiqueta que a estas alturas ya casi compite, en frecuencia y en inflación, con la hegemónica de sostenibilidad a la que se asocia. Me refiero al turismo de calidad.

La objetivación del concepto suele plantearse, sugiriendo la necesidad de invertir en infraestructura de ocio, supuestamente cualificada, campos de golf, muelles deportivos y parques temáticos. Supuestamente cualificada, porque la cualificación de la propuesta parece sobrevenir del alto nivel adquisitivo de los futuros

usuarios en la infraestructura. Es decir, la valoración, una vez más, es puramente monetaria.

Desde nuestra Fundación, y planteándolo muy a grandes rasgos, creemos que lo que debe cualificarse es el contenido de la referencia "turismo de calidad", incorporando, al menos, variables ambientales, territoriales y sociales. Dicho de otro modo, sería conveniente debatir y precisar el concepto, porque la concreción progresiva del término, por parte de sus usuarios habituales, parece, más que dar respuesta a la situación actual de conflicto, repetir una conocida modalidad de inversión intensiva sobre el suelo, ampliando la ocupación, y acentuando las inercias y riesgos del sistema clásico. Así, se habla de la necesidad de crear este tipo de infraestructuras en red, red de muelles deportivos, red de campos de golf, etc.

A nuestro juicio, cualquier oferta turística de calidad, en Lanzarote por supuesto y en Canarias en general, con garantías de futuro, debe atender, en primer lugar y prioritariamente, a la cualificación del territorio y a la calidad del lugar del sistema rural espacial en que se desarrolla. Provocar una nueva escalada de artificialización del espacio, no conduce sino a acentuar el problema de crisis de los sistemas insulares. Un destino diferenciado, singular, es un destino, y lo será más crecientemente, lo hemos escuchado con anterioridad, de lugares, de paisajes, no necesariamente ni exclusivamente de ofertas complementarias, por lo que la calidad ambiental y cultural han de considerarse variables prioritarias.

Formulado de otra manera, podríamos decir que no hay posibilidad de turismo de calidad si no es susceptible de ser compatible con una vida de calidad para el ciudadano que reside en el territorio en el que se desarrolla el negocio turístico.

La ciudadanía de las comunidades de origen, se convierte así en un elemento clave de modulación de la actividad económica turística. Una visión de este tenor, parte del presupuesto de que este turismo no es un tema cerrado, habida cuenta de sus costes ambientales y sociales, sino altamente condicionante e interactivo.

La bolsa de capital acumulado en los seis últimos años, mediante la reserva de inversiones es en la actualidad de un billón de pesetas. Una cantidad sustanciosa que puede convertirse en una

oportunidad, pero también en un riesgo para el territorio del Archipiélago.

Todos confiamos en que el reglamento regulador, recientemente redactado, funcione como un instrumento eficaz para orientar positivamente un caudal inversor, que mal empleado puede comprometer seriamente el futuro inmediato de las islas.

Desde luego, parece sensato no desactivar los temores de que la inercia en los comportamientos puede propiciar nuevos excesos de aplicación en la línea del desarrollo clásico. Más de todo implica mayor progreso. Ante los que habrá que estar vigilantes y de producirse, habrá que proponer medidas correctoras.

La Reserva de Inversiones (RIC), podría constituir una magnífica oportunidad para promover y hacer efectivas políticas ambientales de muy diverso tipo: desde la restauración de ecosistemas degradados a la gestión sostenible de residuos, agua y energías, especialmente en el ámbito de la actividad turística, pasando por la inversión en programas medioambientales y en investigación. Vinculada o no, a este fondo de reserva o a una nueva tributación ecológica finalista futura, habremos de abordar la desclasificación y rescate de suelo urbanizable de uso turístico, para restaurar equilibrios, esponjar territorio, y recalificar territorialmente la oferta y la calidad de vida de los ciudadanos.

Y en este contexto de reflexión, formulamos una pregunta: ¿por qué no incentivar fiscalmente la inversión empresarial, destinada a favorecer tanto la investigación sobre el medio ambiente insular como la puesta en marcha de programas ambientales de diversos signo? Quede formulada la interrogación sobre esta versión de mecenazgo ambiental que sugerimos.

Quiero ya aproximarme a la conclusión de esta intervención, señalando, siquiera someramente, alguno de los retos que, a juicio de la Fundación César Manrique, tiene planteadas nuestra comunidad en el horizonte inmediato y en el contexto de las relaciones entre Turismo y Medio ambiente.

Una línea de reflexión que toma como principio la condición de que es absolutamente necesario profundizar sin dilación en el proceso efectivo de control de crecimiento en Canarias, que encauce y acote la expansión de la actividad turística.

En el marco de una economía de gran vulnerabilidad, por su polarización sectorial, hemos de trabajar conjuntamente en la búsqueda de alternativas que reduzcan los riesgos mediante la diversificación del tejido productivo y, al mismo tiempo, el fortalecimiento sostenible del sector turístico.

En Lanzarote tenemos alguna experiencia acumulada, y nuestra experiencia está hoy al servicio de Canarias para aprovecharla y para mejorar los pequeños avances conseguidos en esta isla, que, aún hoy, se resiente de la pérdida de César Manrique.

Proponemos al Gobierno de Canarias que abra formalmente debate, y que tome medidas inmediatas para la aplicación de una moratoria turística general para el Archipiélago. Sugerimos que profundice en un marco jurídico, que dé cobertura a las políticas de contención del crecimiento turístico y la ocupación del territorio, que en las islas debe contemplarse desde una perspectiva integral de gestión turística del Archipiélago, con las singularidades y velocidades a que haya lugar. Y en este sentido, pedimos al Gobierno que apoye explícitamente el proceso de contención del crecimiento turístico iniciado en nuestra isla, Lanzarote, al tiempo que haga posible que podamos conducirlo más allá de los límites en los que está planteado actualmente, para hacer cumplir los deseos de la gran mayoría de los lanzaroteños.

Sugerimos también al Gobierno central, al Gobierno de Canarias, a cada una de sus consejerías concernidas, y a los ayuntamientos, que es hoy imprescindible profundizar y poner los medios para el estricto cumplimiento de la legalidad vigente en materia medioambiental, urbanística y turística.

La supervisión de las normativas y la sanción de las infracciones, continúan aumentando el agujero negro de una ineficacia administrativa, en estos ámbitos, con altos costes para las islas. Y en este sentido, habrá que dotar de medios a las consejerías para que puedan realizar su labor eficazmente. También, llamamos la atención sobre el pobre papel que en esta dinámica juegan las declaraciones de impacto ambiental y ecológico, reducidas en muchos casos a un requisito vacío de contenido, con pocas garantías y escasa efectividad práctica.

Sin duda, constituiría un eficaz apoyo para perseguir el delito y las infracciones ecológicas y

urbanísticas, la creación de fiscalías de Medio ambiente, en las islas con mayor presión turística. Al tiempo que podíamos ir pensando en la posibilidad y la conveniencia de dar los primeros pasos para considerar, para introducir la consideración de los bienes patrimoniales naturales, como sujeto de derechos jurídicos.

Querámoslo o no, estamos inmersos en un proceso imparabile, que va a conducirnos a revisar el modelo económico de las islas. Mejor entonces, adelantarse o acompañarse con la respiración social, que ir a remolque.

Una tarea en la que la voz de la calle ya ha comenzado a oírse, en forma de malestar y creciente demanda. En ocasiones, lamentablemente, confundiendo los síntomas con las causas del problema. En Lanzarote se oye el grito, desde hace tiempo: "Parar ya, hacer las cosas de otro modo". Y se ha comenzado a caminar en esa dirección. El clima social, favorable a la contención del crecimiento, incorpora voluntades progresivamente. A partir de aquí, se impone cualificar las alternativas, dotarlas de contenido práctico, avanzando sobre los principios generales, trasvasando el vocabulario de los deseos a lenguajes operativos. Por eso, consideramos la oportunidad de invitar a las universidades canarias a pensar en fórmulas que lo hagan posible, a crear tecnologías de modelos alternativos.

Probablemente es la más importante inversión, en I+D, que tienen nuestras islas por delante: concretar y objetivar el discurso económico que haga posible el desarrollo sostenible de las islas, restaurar y reforzar las directrices ambientales inaplazables, etc. Nos compete a todos estimular a la universidad, y a equipos técnicos extrauniversitarios, a trabajar en esa dirección, porque hemos de poner todos los medios para que las islas sigan siendo posibles, para ellas mismas y para sus ciudadanos. Y no nos queda ni mucho tiempo, ni muchas oportunidades.

Mientras tanto, además de contribuir a vertebrar la sociedad en torno a ese objetivo común, es irrenunciable que la Administración Pública pase del discurso y las declaraciones de principio sobre la sostenibilidad, a las decisiones políticas y a las políticas concretas. Un amplio sector de la sociedad canaria lo reclama y lo desea. También confía en que se haga realidad.